

Análisis crítico de los delitos forestales en el nuevo Código Penal de Honduras, Centroamérica.

Critical analysis of forest crimes in the new Penal Code of Honduras, Centroamerica.

Análise crítica dos crimes florestais no novo Código Penal de Honduras, América Central.

RESUMEN

En Honduras, en el año 2019 se derogaron en su totalidad los delitos forestales enunciados en la Ley forestal, y una parte de los mismos fueron trasladados de manera similar o diferente a un nuevo código penal que actualmente contiene un apartado especial para los delitos ambientales que incluyen los que tienen que ver directamente con el sector forestal. En el presente artículo se ha realizado un análisis crítico de los delitos forestales establecidos en el articulado del decreto 130-2017 que contiene el Código penal vigente en Honduras, describiendo cada uno de los artículos, haciendo referencia sobre la adecuación de la descripción del tipo penal a la práctica y al cambio en el mundo actual globalizado. La metodología utilizada es a través del método descriptivo y analítico, obteniendo como resultado una descripción exhaustiva y cualitativa de los artículos relacionados al tema, haciendo conjeturas sobre la realidad práctica, concluyendo que al no considerar algunas acciones como delito, se tendrán que resolver por la vía administrativa, lo que implica un fortalecimiento del departamento legal de la Administración Forestal del Estado, que se traduce en una ampliación significativa de recursos económicos para llevar a cabo este cometido.

Palabras clave: Administración forestal, derecho penal ambiental, sector forestal.

ABSTRACT

In Honduras, in 2019 the forest crimes set forth in the Forestry Law were repealed in their entirety, and a part of them were transferred in a similar or different way to a new penal code that currently contains a special section for environmental crimes that they include those that have to do directly with the forestry sector. In this article, a critical analysis of the forest crimes established in the articles of decree 130-2017 that contains the current Criminal Code in Honduras has been carried out, describing each of the articles, referring to the adequacy of the description of the criminal type. to practice and change in today's globalized world. The methodology used is through the descriptive and analytical method, obtaining as a result an exhaustive and qualitative description of the articles related to the subject, making conjectures about the practical reality, concluding that by not considering some actions as crimes, they will have to be resolved by law. administrative way, which implies a strengthening of the legal department of the State Forestry Administration, which translates into a significant expansion of economic resources to carry out this task.

Keywords: Forestry administration, environmental criminal law, forestry sector.

RESUMO

Em Honduras, em 2019, los crimes florestais previstos na Lei Florestal foram revogados em sua totalidade e parte deles foi transferido de forma semelhante ou diferente para um novo código penal que atualmente contém uma seção especial para crimes ambientais que incluem aqueles que têm a ver diretamente com o setor florestal. Neste artigo, foi realizada uma análise crítica dos crimes florestais estabelecidos nos artigos do decreto 130-2017 que contém o atual Código Penal em Honduras, descrevendo cada um dos artigos, referindo-se à adequação da descrição do tipo penal. para praticar e mudar no mundo globalizado de hoje. A metodologia utilizada é através do método descritivo e analítico, obtendo como resultado uma descrição exaustiva e qualitativa dos artigos relacionados ao assunto, fazendo conjecturas sobre a realidade prática, concluindo que ao não considerar algumas ações como crimes, elas terão que ser resolvido por via administrativa, o que implica um reforço do departamento jurídico da Administração Florestal do Estado, o que se traduz numa expansão significativa dos recursos económicos para a realização desta tarefa.

Palavras-chave: Administração florestal, direito penal ambiental, setor florestal.

INTRODUCCIÓN

En Honduras no existen estudios que indiquen la eficacia de las leyes penales para la protección legal del medio ambiente, por el contrario, existe poco conocimiento sobre el tema, a tal punto que se consideran normas subjetivas dependientes de estudios técnicos que no permiten su fácil aplicación, sin embargo, durante los últimos 5 años, se han experimentado cambios significativos, con la promulgación de un reformado Código Penal hondureño, decreto 130-2017, que establece sanciones penales, independiente del régimen administrativo, impone responsabilidad a las personas naturales y jurídicas por los perjuicios ocasionados al ambiente. Se establecen artículos específicos que persiguen la penalización de conductas tipificadas como delito, para lograr la protección de la foresta hondureña como un bien protegido de interés público, tomando como base el artículo 145 de la Constitución de la Republica que establece el deber del Estado de propiciar el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. Aun así, siendo que el derecho ambiental es de naturaleza preventiva, la intervención penal como *ultima ratio*, se torna indispensable cuando es la única vía para prevenir una conducta antijurídica, que ponga en grave peligro el equilibrio de los ecosistemas naturales, y cuando es la única vía para la solución de conflictos. El propósito del estudio es describir las reformas a las normas penales que involucran al sector forestal de Honduras, y que por ende protegen a la foresta hondureña de las acciones u omisiones de tipo penal, realizadas no solo por la persona natural, sino también por la persona jurídica, obteniendo como resultados la determinación de las importantes reformas realizadas a nuestro Código Penal con relación a los bosques de Honduras en estos últimos años, las deficiencias aún subsistentes, y la necesidad de introducir algunas reformas a las normas penales que permitan su perfeccionamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada consistió en una descripción exhaustiva y cualitativa de los artículos relacionados al tema, a través del método descriptivo y analítico, haciendo conjeturas sobre la realidad práctica, tomando en consideración la metodología utilizada por Peña Zurita en el Estudio de las ordenanzas y políticas ambientales en la ciudad de Guaranda, Ecuador (Peña, 2012). La técnica de investigación para la recolección Bibliográfica que consistió en Fichas Bibliográficas para recopilar la información de los diferentes textos que tenían relación con el tema de la investigación, y Fichas Mnemotécnicas para realizar Análisis crítico e interpretaciones de los contenidos jurídicos recabados.

RESULTADOS Y DISCUSION

Según datos del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 2020, los datos de actividad por deforestación para el periodo 2016-2018 es de 36,911.59 ha, que corresponde a una perdida promedio anual de 18,455.80 ha/año (Anuario Estadístico Forestal, 2020), lo que ha provocado daños ambientales severos que son de preocupación mundial. Debido a esta preocupación mundial, se optó por acudir a la protección penal del medio ambiente, a través de la adecuación de nuestra legislación penal en materia de delitos forestales y ambientales a las exigencias de la comunidad internacional. Libester en su libro sobre delitos ecológicos, nos menciona que a nivel internacional, la mayor parte de las legislaciones modernas, han normado tipos penales ambientales y nos hace referencia a países como Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Inglaterra, Italia, Japón, México, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Suecia, Túnez, Turquía y Venezuela como países que de una u otra forma han incorporado la protección penal, y luego agrega a la lista anterior, a países como Austria, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay y Suiza. Pudiendo completar la lista con Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Reino Unido, quienes han adoptado la responsabilidad penal por infracción de la legislación ambiental. (Libester, 2000).

Partiendo de lo anterior, la preocupación mundial descansa en el Derecho Penal Ambiental, lo que es contradictorio con la naturaleza preventiva propia del derecho ambiental, que debe primar antes que la sancionatoria, ya que en esta rama del derecho lo más importante es prevenir el daño.

Según Toro, 2015, en su investigación *Estudio del Delito Ambiental en Chile, Escenarios y Recomendaciones al Sector Privado ante su Posible Tipificación*, “el derecho penal ambiental para ejercer su función, necesita tipificar legalmente la conducta lesiva como delito, ya que debe proteger la libertad individual de los ciudadanos, pudiendo sólo condenarlos cuando existe un tipo descrito previamente; y porque tiene que proteger sólo a los bienes jurídicos indispensables”.

Quien hace referencia a Jaquenod de Zögön, 1989, quien define como delito ambiental, a “aquella acción u omisión prevista y penada por la ley que atenta contra el medio ambiente”¹

El Marco Legal e Institucional

En el año 2007, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre a la que nos referiremos en adelante como LFAPVS, trajo consigo importantes cambios al país, ya que creó el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, cuyo marco institucional está conformado por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a cargo de un Director Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, con rango de Secretario de Estado y con participación en el Consejo de Ministros (Congreso Nacional de la Republica, 2007). En esta ley estaban establecidos hasta finales del año 2019 los delitos forestales, específicamente en los artículos 167 último párrafo y 168 al 192, mismos que fueron derogados por el Código Penal Vigente, Decreto 130-2017.

Delitos Forestales y el Código Penal Vigente Decreto 130-2017.

Del análisis realizado de los delitos forestales establecidos en el Código Penal y a su vez derogados de la LFAPVS mediante este mismo decreto 130-2017, se pudo destacar de manera general que tienen un impacto sustancial en la disminución de las penas, que los delitos forestales previstos en la LFAPVS fueron derogados en su totalidad, que se excluyeron ciertos delitos de importancia, y así mismo al pasarlos al código penal se utilizó terminología técnica no apropiada o de imposible aplicación.

Delitos con Terminología Técnica no Apropriada o de Imposible Aplicación:

Se establecen en el artículo 327, “terrenos forestales y masas boscosas”, siendo lo correcto enunciar terrenos de vocación forestal cubiertos o no de bosque. También se debe cambiar el término “zona vegetal protegida” por zona protegida simplemente, ya que responden a los términos que enuncia la LFAPVS. En este artículo del código penal, se debería diferenciar el incendio doloso del incendio culposo y establecer diferencias en las penas, esto ayudaría a que el artículo sea más específico y aplicable a cada caso concreto.

Por otra parte, técnicamente no hay niveles de protección, y tampoco existen estadísticas sobre calidad de las zonas en el país, por lo que se vuelve imposible de aplicar.

Siendo que el proceso penal constituye la *última ratio*, la conducta enunciada en el artículo 606 del código penal relacionada a la quema de desechos o productos vegetales, debe de sancionarse dentro del ámbito administrativo, por lo que debe ser incorporada bajo los términos técnicos apropiados en la LFAPVS, ya que el uso del fuego es necesario en las actividades de manejo forestal, por lo tanto es el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre quien debe determinar la necesidad de aplicación de una multa, por tratarse del ente designado según la ley y además por ser quien aprueba las actividades de quemas controladas en

¹ Jaquenod de Zögön, S. 1989. El Derecho ambiental y sus principios rectores. 3a. ed. Madrid, España: Dykinson. 525p.

los planes de manejo, planes operativos, planes de reforestación, planes de saneamiento, entre otros.

El delito de propagación de plagas o enfermedades, enunciado en el artículo 329 del código penal, se considera de imposible aplicación, porque hasta la fecha la Administración Forestal del Estado mantiene el criterio de que las plagas como la del gorgojo del pino entre otras, surgen de manera natural en los bosques, en ese sentido estaba más completo el artículo 184 de la LFAPVS que menciona la propagación por omisión.

Artículos de importancia derogados en la LFAPVS y no incluidos en el nuevo Código Penal:

La foresta hondureña se percibe reducida y el deterioro ambiental cada día se incrementa, por lo que, habiendo establecido la tendencia mundial sobre el derecho penal ambiental, se estableció que en Honduras los delitos derogados, enunciados en los Artículos 178, 179, 181, 182, 183, 186, 190, 192, de la LFAPVS, deben ser incluidos en el Código Penal juntamente con la reducción de penas realizada para los demás delitos, o en su defecto se deben de mantener como tal en la LFAPVS.

Lo anterior debido a la importancia de cada uno y el ámbito que regulan, en virtud de que su ausencia puede repercutir negativamente en el manejo forestal del país, lo que significaría un retroceso significativo en perjuicio de los bosques de Honduras.

Delitos por: apropiación de un área forestal nacional o municipal (art 178); tala, descombro, roturación y roza (art 179); incumplimiento de actividades contenidas en el plan de manejo y el plan operativo de los propietarios o arrendatarios (art 181); responsabilidad de los técnicos(as) forestales calificados(as) (art 182); pastoreo en las áreas forestales (art 183); sanción por obstaculizar ejecución de planes de manejo o plan operativo aprobado por el Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF) (art 186); autorizaciones ilegales (art 190) y las circunstancias agravantes propias del componente forestal (art 192) enunciadas en la LFAPVS deben mantenerse, ya que responden a las necesidades del país, a la presión sobre los recursos, y además evitan que terceros se interpongan en las actividades de manejo del bosque.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La falta de colaboración de las entidades estatales es una de las principales limitaciones para el desarrollo del estudio, pues no se pudo obtener información sobre la aplicabilidad del código penal vigente en los últimos 5 años.

CONCLUSIONES

El deterioro ambiental en Honduras se incrementa con el pasar de los años, sin embargo, durante el estudio descriptivo y analítico de los artículos relacionados al tema, se pudo determinar que se han eliminado delitos que impedían la obstaculización del manejo forestal, como medida que

proveía seguridad jurídica a los propietarios de planes de manejo y planes operativos; por tal razón es necesaria la inclusión de los mismos en el código penal o en su defecto en la LFAPVS.

Siendo que algunas conductas ya no son consideradas como delito en el Código Penal, se debe de fortalecer al departamento legal de la Administración Forestal del Estado, para que resuelva por la vía administrativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Congreso Nacional de la Republica. (1982). Decreto No. 131-1982. Constitución de la Republica. . Tegucigalpa, M.D.C.: O.I.M. Editorial S.A. de C.V.

Congreso Nacional de la Republica. (1983). Decreto 144-83, Código Penal. Tegucigalpa, M.D.C.: OIM Editorial S.A. de C.V.

Congreso Nacional de la Republica. (2007). Decreto 98-2007, Ley forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Tegucigalpa, M.D.C.: OIM Editorial S.A. de C.V.

Congreso Nacional de la Republica. (2019). Decreto 130-2017, Código Penal. Tegucigalpa, M.D.C.: OIM Editorial S.A. de C.V.

Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). (2020). Anuario Estadístico Forestal 2020. 35, pág. 117. Tegucigalpa, M.D.C.: OIM Editorial S.A. de C.V.

Libester, M. (2000). Delitos Ecológicos. 2a. ed. : 197p (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Depalma.

Peña, C. J. (2012). Ordenanzas y Políticas Ambientales Municipales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Guaranda, Ecuador.

Sánchez, S. F. (2016). La protección penal del medio ambiente. Análisis del art. 338 del Código Penal colombiano sobre minería ilegal. Trans-pasando Fronteras (9), 77-114.

Silva, H. (2010). El delito ambiental en el Derecho chileno y comparado. Santiago, Chile: Thomson Reuters Puntotex.

Toro, B. T. (2015). Estudio del Delito Ambiental en Chile, Escenarios y Recomendaciones al Sector Privado ante su Posible Tipificación. Memoria para optar al título profesional de: Ingeniero en Recursos Naturales Renovables. Santiago, Chile. 22p.